

INE/CG702/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022
DENUNCIANTE: INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DENUNCIADO: MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022, QUE SE INICIÓ CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN RRA 11165/21, POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE LA SUPUESTA TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL ATRIBUIDA A MORENA, POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A LAS QUE ESTÁN SUJETOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

| G L O S A R I O | |
|-------------------------------|--|
| <i>Consejo General</i> | Consejo General del Instituto Nacional Electoral. |
| <i>Constitución</i> | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| <i>INE</i> | Instituto Nacional Electoral. |
| <i>INAI</i> | Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. |

| G L O S A R I O | |
|--------------------------------------|---|
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| LGPP | Ley General de Partidos Políticos. |
| Ley Federal de Transparencia | Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
| Ley General de Transparencia | Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
| Organismos u órganos garantes | Aquellos con autonomía constitucional, especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| Tribunal Electoral | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |

A N T E C E D E N T E S

I. Vista del INAI. Mediante oficio INAI/STP-DGCR/1216/2022,¹ y anexos,² el INAI dio vista a esta autoridad, en esencia, con motivo de lo siguiente:

- El incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información por parte de MORENA, al no atender la resolución dictada el **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**³ en el expediente del medio de impugnación **RRA 11165/21**, en la que el Pleno del INAI, instruyó al referido instituto político que tenía un plazo de diez días hábiles para cumplir con lo siguiente:

“ ...

¹ Visible a páginas 01-03 ambos lados del presente expediente. En todos los casos corresponde al expediente al rubro citado.

² Visible a páginas 04-64.

³ Visible a páginas 04 anverso y 05-22 ambos lados.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

- a) Realice una nueva búsqueda en el área administrativa competente a saber, la Secretaría de Finanzas, con un criterio de búsqueda amplio, a efecto de localizar e informar si compró o alquiló el inmueble ubicado en la calle Ejército Nacional número 359, colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; y en su caso, entregar copia en formato electrónico del contrato de compraventa o arrendamiento, donde se especifique la fecha de contratación, el nombre del proveedor, objeto y monto del contrato.

En el supuesto de que el documento contenga información clasificada como confidencial, el sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporcionando el mismo en versión pública, acompañando la resolución del Comité de Transparencia en donde funde y motive la clasificación de los datos confidenciales.

En ese sentido, a efecto de tener certeza sobre el debido acceso a la información, este Instituto, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, verificará la versión pública elaborada por el sujeto obligado previa entrega a la parte recurrente.

- b). Asimismo, en caso de no localizar lo requerido, el Comité de Transparencia deberá emitir acta donde confirme la inexistencia de la información de manera fundada y motivada, de conformidad con el artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública...”

Sin embargo, no obstante el mandamiento del que fue objeto MORENA, y que fue debidamente notificado por medio de la herramienta de comunicación de ese organismo de transparencia, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno,⁴ dicho partido político fue omiso en atender.

Ante tal incumplimiento por el sujeto obligado, **el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno,⁵ el INAI acordó dar parte al superior jerárquico del sujeto obligado**, para que, en el plazo de cinco días hábiles, se subsanara el incumplimiento decretado, conforme a lo siguiente:

“**TERCERO.** Con fundamento en los artículos 61 fracciones IV, XI y XII, 62, 134, 169 párrafo primero, y 171 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a través de su Unidad de Transparencia, se requiere al superior jerárquico de todas las áreas poseedoras de los documentos de mérito, les instruya a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la misma: debiendo remitir a este Instituto en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo; las constancias que lo acrediten.

⁴ Visible a página 26.

⁵ Visible a página 58 ambos lados.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, este Instituto podrá determinar la aplicación de una medida de apremio, a quien resulte responsable del incumplimiento, o bien, dar cauce al procedimiento sancionatorio correspondiente; en términos a lo previsto en los artículos 171 fracción 111, 174, 175 y 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública...”

El acuerdo fue notificado, al superior jerárquico del sujeto obligado, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.⁶

El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno,⁷ el INAI determinó que persistía el incumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21, conforme a lo siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El Sujeto Obligado fue omiso respecto a la atención del requerimiento de cumplimiento a la resolución RRA 11165/21, por ello, se estima que el sujeto obligado no acató la instrucción de la resolución de mérito, por tanto, se concluye que persiste el **INCUMPLIMIENTO** a la resolución emitida por el Pleno de este Instituto, relacionada con el recurso de revisión citado al rubro.”

El acuerdo fue notificado, al sujeto obligado, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.⁸

Atento a lo anterior, la autoridad en materia de transparencia ordenó dar vista a este Instituto, al no acatar la resolución de mérito.

II. Registro, reserva de admisión e investigación preliminar.⁹ El cuatro de mayo de dos mil veintidós, la documentación ya precisada, se registró como procedimiento sancionador ordinario, bajo la clave de expediente **UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022**, determinando la reserva sobre la admisión o desechamiento del asunto hasta que culminaran las diligencias de investigación preliminar.

Asimismo, en ese proveído se ordenó requerir al */INAI/*, a efecto de que informara si se encontraban firmes las determinaciones por las que se determinó el incumplimiento de la resolución dictada en el expediente del medio de impugnación RRA 11165/21.

⁶ Visible a página 60.

⁷ Visible a página 61.

⁸ Visible a página 63.

⁹ Visible a páginas 65-71.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

Por oficio INAI/STP-DGCR/1363/2022¹⁰ el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI, acompañó copia certificada del similar INAI/STP-DGCR/1341/2022,¹¹ mediante el cual el Director General de Asuntos Jurídicos, de dicho organismo público autónomo, refirió que *no existe antecedente alguno de que dichas resoluciones hayan sido impugnadas o recurridas por alguna de las partes a través del juicio de amparo.*

III. Admisión y emplazamiento.^{12,13} Mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se acordó admitir a trámite el procedimiento y se ordenó emplazar a **MORENA**, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

| Sujeto-Oficio | Notificación | Contestación |
|---|---|-----------------------------------|
| MORENA INE-UT/04929/2022 ¹⁴ | Citatorio: 26 de mayo de 2022 ¹⁵ Cédula: 27 de mayo de 2022 ¹⁶ Plazo: 30 de mayo al 03 de junio de 2022. | 03 de junio de 2022 ¹⁷ |

IV. Diligencias para mejor proveer. Del análisis de la respuesta de MORENA, al emplazamiento, en particular de los medios de prueba aportados para, a su juicio, desvirtuar las infracciones que se le atribuían, destacó el documento titulado *Dictamen de cumplimiento* con clave 22300, de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictaminado por el Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y validado por la Secretaría de Acceso a la Información en la Ciudad de México del INAI.

¹⁰ Visible a página 78.

¹¹ Visible a páginas 79-80.

¹² Visible a páginas 81-91.

¹³ Cabe precisar que MORENA impugnó dicho acuerdo de admisión y emplazamiento; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, al resolver el veintinueve de junio de dos mil veintidós el expediente SUP-RAP-151/2022,¹³ determinó **confirmar el acuerdo de mérito**, en esencia, porque el acto impugnado sí es materia electoral y la vía del procedimiento ordinario sancionador es la idónea para determinar el grado de responsabilidad y, en su momento, la posible sanción a MORENA, por lo que no se vulnera los principios de legalidad, tipicidad, fundamentación y motivación para la admisión en la vía antes mencionada la vista remitida por el INAI al INE. Consulta en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0151-2022.pdf

¹⁴ Visible a página 94.

¹⁵ Visible a páginas 95-96.

¹⁶ Visible a página 97.

¹⁷ Visible a páginas 101-131 y anexo 132.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

Por lo que, mediante proveídos de diecisiete de junio,¹⁸ cuatro¹⁹ y doce²⁰ de julio, todos de dos mil veintidós, se ordenó requerir al Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI para que, en esencia, informara si el *Dictamen de cumplimiento* con clave 22300, de diez de agosto de dos mil veintiuno guarda o tiene relación directa con el medio de impugnación RRA 11165/21.

Los acuerdos se diligenciaron en los siguientes términos:

| Notificación al INAI | Contestación |
|--|--|
| INE-UT/05783/2022 20 de junio de 2022 | Oficio INAI/STR/0417/2022 15 de julio de 2022 ²¹ |
| INE-UT/06235/2022 05 de julio de 2022 | |
| INE-UT/06544/2022 14 de julio de 2022 | |

V. Alegatos.²² Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a MORENA, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

| Sujeto-Oficio | Notificación | Contestación |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| MORENA INE-UT/6958/2022 | Citatorio: 10 de agosto de 2022 Cédula: 11 de agosto de 2022 Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022 | 18 de agosto de 2022 ²³ |

VI. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución del asunto.

VII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. En la cuarta sesión ordinaria de carácter privado, celebrada el doce de octubre de dos mil veintidós, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

¹⁸ Visible a páginas 133-139 (139 ambos lados).

¹⁹ Visible a páginas 146-151.

²⁰ Visible a páginas 158-165.

²¹ Visible a páginas 170 y anexos a página 171-190.

²² Visible a páginas 193-196.

²³ Visible a páginas 206-219.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para conocer de las infracciones a la normativa electoral y resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En adición de lo anterior, debe tenerse en cuenta que los artículos 35 y 44, párrafo 1, inciso j), de la *LGIPE*, confieren a este órgano superior de dirección la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

En el caso, se actualiza la competencia específica de este *Consejo General* conforme con lo previsto por el artículo 443, párrafo 1, inciso k), de la *LGIPE*, en el que se establece, como infracción sancionable por esta autoridad, el incumplimiento, por parte de los partidos políticos, de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Ahora bien, en el caso en análisis, debe establecerse que, conforme a la resolución dictada en el expediente del medio de impugnación RRA 11165/21, que dio origen al procedimiento que nos ocupa, **MORENA** incumplió con lo mandatado por el Pleno del *INAI*, en la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente antes referido.

En el presente asunto, la conducta imputada a *MORENA* es la transgresión a lo dispuesto por los artículos 6, Apartado A, fracciones I, V, VI, VII y VIII, párrafo séptimo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n); de la *LGIPE*; 25, párrafo 1, incisos a), x) e y); 27, 28, párrafos 1 y 6; 30, párrafo 1, incisos f) y t); y 32, de la *LGPP*; 24, fracciones X, XI, XIV; 70, fracciones XXVII y XXXIV; 76, fracciones IV y XXV; 97 y 206, fracciones II y XV, de la *Ley General de Transparencia*; 11, fracciones X, XI y XVI; 74, 93 y 186, fracciones II y XV, de la *Ley Federal de Transparencia*.

Finalmente, como se adelantó, en el caso resulta importante señalar que **MORENA** impugnó el acuerdo de admisión y emplazamiento del presente asunto; el cual fue **confirmado** por la Sala Superior del *Tribunal Electoral*, al resolver el expediente SUP-RAP-151/2022,²⁴ determinando que, el acto impugnado sí es materia electoral y la vía del procedimiento ordinario sancionador es la idónea para determinar el grado de responsabilidad, y en su momento, la posible sanción a MORENA, por la vista dada por el INAI.

SEGUNDO. CONSIDERACIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA O DESECHAMIENTO HECHAS VALER POR EL PARTIDO POLÍTICO DENUNCIADO.

Al responder el emplazamiento de que fue objeto en el presente procedimiento, así como en su escrito de alegatos, **MORENA** se excepcionó de la forma siguiente:

Sine actione agis, consistente en que no existe caudal probatorio suficiente para acreditar las conductas señaladas por el INAI de los hechos presuntamente transgresores a la normativa electoral narrados en la vista:

- ✓ ***Plus petitio***, ya que el INAI demanda más de lo que es debido, por carecer de motivación.

Al respecto, el artículo 46, párrafo 1, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, establece lo siguiente:

“Artículo 46.

Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario

1. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando:

...

III. Resulte frívola, de acuerdo con lo establecido en los artículos 440, párrafo 1, inciso e) de la Ley General.”

Por su parte, el artículo 440, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, mandata lo siguiente:

“Artículo 440.

²⁴ Consulta en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0151-2022.pdf

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

...

e) Reglas para el procedimiento ordinario sancionador por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidada del escrito y no se presenten pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar la veracidad.”

En ese sentido, se advierte que la causal invocada por MORENA es la contenida en la fracción I, del inciso e), del artículo 440, de la LGIPE, es decir, solicita el desechamiento de la denuncia por contener pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, o bien, porque es notorio y evidente que la pretensión no se encuentra al amparo del derecho.

Con relación a ello, esta autoridad resolutora considera que no le asiste la razón al instituto político denunciado, en virtud de que, como lo señaló la Sala Superior del *Tribunal Electoral*, es jurídicamente viable la vista dada por el INAI, ya que, los hechos sometidos a consideración de este Instituto, sí son materia electoral y *la vía procedimiento ordinario sancionador es la idónea para determinar el grado de responsabilidad, y en su momento, la posible sanción a MORENA, por lo que no se vulnera los principios de legalidad, tipicidad, fundamentación y motivación para la admisión en la vía antes mencionada la vista remitida por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al Instituto Nacional Electoral.*²⁵

Esto es, el máximo órgano jurisdiccional de la materia en la sentencia del expediente SUP-RAP-151/2022, concluyó que el *procedimiento sancionador ordinario es el previsto en la legislación para conocer del incumplimiento y sanción respecto de las obligaciones de transparencia que tienen los partidos políticos.*²⁶

²⁵ Véase sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP-151/2022, páginas 7-8.

²⁶ Visible a página 12 de la sentencia.

Por las consideraciones antes expuestas, se considera que no le asiste la razón al partido político MORENA, en consecuencia, es improcedente la causal de desechamiento que hace valer; por lo que se procede a resolver el fondo del presente asunto.

A similares consideraciones se arribaron en las resoluciones INE/CG360/2020 e INE/CG56/2021, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores UT/SCG/Q/RVM/JD14/PUE/75/2019 y UT/SCG/Q/NRRS/JD07/HGO/32/2020, respectivamente.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.

1. Planteamiento del caso.

Para un mejor entendimiento del planteamiento del caso que a continuación se enuncia, y que constituye la materia del procedimiento, es pertinente dejar establecido que la *LGPE* contiene un capítulo en el que se establecen los sujetos, conductas reprochables y sanciones aplicables a cada caso.

Dentro de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la ley electoral, se encuentran los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 442, párrafo 1, inciso a), de la *LGPE*.

Por cuanto hace a las conductas sancionables, el artículo 443, párrafo 1, incisos a) y k), de esa legislación, prevé que serán consideradas como infracciones, entre otras, el incumplimiento de los partidos políticos a las obligaciones señaladas en la *LGPP*, así como incumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

En esta lógica, la *LGPP* precisa en sus artículos 25, párrafo 1, inciso x); 27 y 28, párrafos 1, 2 y 6, que los partidos políticos deben cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información y, en ese sentido, deben acatar las reglas en materia de transparencia y acceso a la información establecidas en dicha ley, además de lo ordenado por las leyes general y federal en materia de transparencia.

Para mayor claridad, se transcriben los preceptos citados:

“Artículo 25.

- 1.** Son obligaciones de los partidos políticos:

...

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone, y

...

Artículo 27.

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

Artículo 28.

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia.

(...)

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo, la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia."

En ese orden de ideas, es inconcuso que en la ley en comento se establece el deber correlativo a cargo de los partidos políticos para efecto de garantizar el ejercicio del derecho de las personas para acceder a la información de esos institutos políticos, de forma directa, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por las leyes general y federal de transparencia.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, fracción I, de la *Constitución*, toda la información en posesión de los **partidos políticos**, entre otros sujetos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Asimismo, dicho precepto constitucional establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública; se establecerán mecanismos de acceso a la información y

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la propia *Constitución*; los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos, y que **la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.**

La *Ley General de Transparencia*, por su parte, señala en su artículo 23, que, entre otros, **los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información** y proteger los datos personales que obren en su poder.

Ahora bien, el artículo 89 de la *Ley General de Transparencia* establece que cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esa misma Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 94, primer párrafo y 96, de la *Ley General de Transparencia*, los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, son competentes para conocer resolver las denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. La resolución que emitan debe estar fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

Además, de conformidad con el artículo 97, párrafos segundo y tercero de la *Ley General de Transparencia*, las resoluciones que emitan los organismos garantes, como es el caso del INAI, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, y las mismas únicamente podrán ser impugnadas por el particular afectado mediante Juicio de Amparo. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique la misma.

Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 98, párrafos segundo y tercero y 99, de la *Ley General de Transparencia*, los Organismos garantes, según corresponda, procederán conforme a lo siguiente:

- Verificarán el cumplimiento a la resolución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente.
- Si consideran que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.
- En caso de que el *INAI* o los Organismos garantes, según corresponda, consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio **o determinaciones que resulten procedentes**.

Finalmente, los artículos 206, fracción XV, y 209, de la *Ley General de Transparencia*, establecen que será causa de sanción a los sujetos obligados **no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes, en ejercicio de sus funciones**, el organismo garante competente **dará vista**, según corresponda, **al INE** o a los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas competentes, **para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables**.

Las referidas disposiciones de la *Ley General de Transparencia* están previstas en los artículos 9, 142, 143, fracción II, 149, 150, 151, fracción III y último párrafo, 157, 186, fracción XV y 187, párrafo primero, de la *Ley Federal de Transparencia*.

“**Artículo 9.** Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente Ley.

...

Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

...

II. La declaración de inexistencia de información;

Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

...

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

...

Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado "Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional", en el presente Título, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.

...

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas:
[...]

XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.
[...]

Artículo 187. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Nacional Electoral, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.”

De lo inserto, se puede concluir que:

- ❖ Los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y, como tales, podrán ser sujetos de sanción en caso de incumplir con tales obligaciones.
- ❖ El *INAI* es responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales y entre sus atribuciones tiene el conocer, sustanciar y resolver sobre las denuncias interpuestas por los particulares en contra de los partidos políticos por la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
- ❖ Las determinaciones del *INAI* son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; únicamente podrán ser impugnadas por los particulares ante el Poder Judicial de la Federación y por el Consejero Jurídico del Gobierno Federal, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- ❖ Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el *INAI* debe dar vista al *INE*, para que resuelva lo conducente, pues el órgano garante federal no tiene atribuciones para sancionar servidores públicos ni partidos políticos.

En conclusión, la ruta de tramitación de un asunto como el que se resuelve debe ser:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

- I. Los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y, como tales, podrán ser sujetos de sanción en caso de incumplir con tales obligaciones
- II. Cualquier persona puede solicitar información a la que se encuentran obligados los partidos políticos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
- III. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
- IV. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado., las cuales establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Dichas determinaciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
- V. Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente. Si consideran que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que se dé cumplimiento a la resolución.
- VI. En caso de que el *INAI* o los Organismos garantes, según corresponda, consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento.
- VII. Cuando un partido político deja de cumplir con las resoluciones emitidas por el *INAI* respecto del incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, corresponde a dicho Instituto—

como autoridad responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales—, conocer de la eventual infracción que de tal incumplimiento se derive.

- VIII.** Enseguida, si el *órgano garante de transparencia* determina la existencia de infracción, lo procedente es que dicha autoridad remita una vista a este órgano constitucional.
- IX.** Recibida por el *INE* la vista remitida por la autoridad de transparencia, se debe proceder, como se hizo en el caso, a tramitar el expediente, en la vía de procedimiento ordinario sancionador, verificando, en principio, que no exista medio de impugnación en contra de dicha determinación y, seguida la secuela procesal correspondiente, es decir, garantizando en todo momento el respeto el debido proceso como garantía del partido político, determinar el grado de responsabilidad respecto de la(s) conducta(s) materia de la vista y, con base en ello, imponer la sanción que corresponda, en términos de lo establecido en las normas electorales, es decir la *LGIPE* y la *LGPP*.

Sentado lo anterior, conviene precisar los hechos atribuidos a *MORENA* y la temporalidad en que acontecieron, como se detalla enseguida:

El **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, en el expediente RRA 11165/21, el Pleno del *INAI* **revocó** la respuesta emitida por *MORENA*, a la solicitud de información presentada el dos de agosto de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En esa determinación, se instruyó al partido denunciado para que, dentro del plazo de **diez** días hábiles, realizara las siguientes acciones:

“ ...

- a)** Realice una nueva búsqueda en el área administrativa competente a saber, la Secretaría de Finanzas, con un criterio de búsqueda amplio, a efecto de localizar e informar si compró o alquiló el inmueble ubicado en la calle Ejército Nacional número 359, colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; y en su caso, entregar copia en formato electrónico del contrato de compraventa o arrendamiento, donde se especifique la fecha de contratación, el nombre del proveedor, objeto y monto del contrato.

En el supuesto de que el documento contenga información clasificada como confidencial, el sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporcionando

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

el mismo en versión pública, acompañando la resolución del Comité de Transparencia en donde funde y motive la clasificación de los datos confidenciales.

En ese sentido, a efecto de tener certeza sobre el debido acceso a la información, este Instituto, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, verificará la versión pública elaborada por el sujeto obligado previa entrega a la parte recurrente.

- b) Asimismo, en caso de no localizar lo requerido, el Comité de Transparencia deberá emitir acta donde confirme la inexistencia de la información de manera fundada y motivada, de conformidad con el artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

Sin embargo, no obstante el mandamiento del que fue objeto MORENA, y que fue debidamente notificado por medio de la herramienta de comunicación de ese organismo de transparencia, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dicho partido político fue omiso en atender, ya que si bien MORENA remitió diversas constancias el once de noviembre de dos mil veintiuno, lo cierto es que el **veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno**, el INAI acordó lo siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. Mediante correo electrónico el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo EXT/CT/10/11/2021.05 de su Comité de Transparencia donde reserva por tres años la información relativa a si compró o alquiló el inmueble ubicado en la calle Ejercito Nacional número 359, colonia Granada, Alcaldía Miguel hidalgo, en la Ciudad de México.

Sin embargo, los hechos manifestados por el sujeto obligado para llevar a cabo la clasificación de la información no tienen relación con el cumplimiento ordenado por este Instituto, en referencia a que si MOREN compró o alquiló el inmueble de mérito.

Por lo anterior, se estima que el sujeto obligado no acató la instrucción de la resolución de mérito, por tanto, lo procedente es tener por **INCUMPLIDA** la resolución relacionada con el recurso de revisión citado al rubro.”

Ante tal incumplimiento por el sujeto obligado, el **veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el INAI determinó requerir al superior jerárquico del sujeto obligado**, para que, en el plazo de cinco días hábiles, diera cumplimiento conforme a lo siguiente:

“TERCERO. Con fundamento en los artículos 61 fracciones IV, XI y XII, 62, 134, 169 párrafo primero, y 171 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a través de su Unidad de Transparencia, se requiere al superior jerárquico de todas las áreas poseedoras de los documentos de mérito, les instruya a

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la misma: debiendo remitir a este Instituto en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo; las constancias que lo acrediten.

Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, este Instituto podrá determinar la aplicación de una medida de apremio, a quien resulte responsable del incumplimiento, o bien, dar cauce al procedimiento sancionatorio correspondiente; en términos a lo previsto en los artículos 171 fracción 111, 174, 175 y 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

El acuerdo fue notificado, al superior jerárquico del sujeto obligado, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el INAI determinó que persistía el incumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21, conforme a lo siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El Sujeto Obligado fue omiso respecto a la atención del requerimiento de cumplimiento a la resolución RRA 11165/21, por ello, se estima que el sujeto obligado no acató la instrucción de la resolución de mérito, por tanto, se concluye que persiste el **INCUMPLIMIENTO** a la resolución emitida por el Pleno de este Instituto, relacionada con el recurso de revisión citado al rubro.”

El acuerdo fue notificado al sujeto obligado, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.

2. Respuesta al emplazamiento y vista de alegatos.

Como se asentó en el apartado de antecedentes, mediante acuerdos de veinticinco de mayo y veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento y vista de alegatos a MORENA, quien presentó sendos escritos de contestación.

En consecuencia, toda vez que en dichos momentos procesales formuló su defensa respecto a las imputaciones que por esta vía se resuelven, en aras de maximizar su derecho a una debida defensa, se dará contestación a los argumentos hechos valer en los referidos escritos, en los que argumentó, esencialmente, lo siguiente:

- Objetó los medios de prueba que aportó el **INAI**, pues, a su decir, de ellas, no se advierte la omisión que se hizo consistir en el supuesto incumplimiento de la obligación constitucional de dar respuesta a la solicitud de información

que origina la resolución en comento. Lo anterior, a su juicio, porque no se analiza el motivo de este y únicamente señala que hubo un "incumplimiento", el cual no guarda relación con el desahogo que presentó en el expediente del RRA 11165/2021.

- La Unidad de Transparencia, de MORENA, agotó sus responsabilidades de conformidad a la *Ley Federal de Transparencia*, ya que turnó el cumplimiento al recurso de revisión RRA 11165/21 a la Secretaría de Finanzas, por ser la unidad administrativa que podría contar con la información, de conformidad al Estatuto de MORENA.
- Una vez que la Unidad de Transparencia de MORENA, recibió el oficio de cumplimiento, el mismo fue notificado al recurrente, a través del correo electrónico señalado para tales fines, así como a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI, como lo comprueba con los oficios MORENA/OIP/1176/2021²⁷ y MORENA/OIP/1177/2021.²⁸
- La Secretaría de Finanzas de MORENA, dio cumplimiento a la instrucción del recurso de revisión RRA 11165/21, ya que, a su decir, dicha Secretaría realizó una nueva búsqueda de la información requerida con lo cual se satisfizo la instrucción del Pleno del INAI.
- Que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la cuadragésima séptima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de MORENA, se aprobó como reservada por tres años, la información requerida, aun cuando el resultado de dicha búsqueda no corresponde a la pretensión del recurrente, jurídicamente este sujeto obligado sí acató la instrucción del órgano garante.
- La Secretaría de Finanzas determinó que el pronunciamiento instruido por el Pleno del INAI en la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21, actualiza el supuesto de clasificación de la información como reservada, de conformidad con la fracción V del artículo 110 de la *Ley Federal de Transparencia*.
- MORENA obtuvo en la evaluación de portales de obligaciones de transparencia, el ciento por ciento de cumplimiento a dichas obligaciones, lo que demuestra que este sujeto obligado atiende en tiempo y forma el

²⁷ Visible a página 132.

²⁸ Visible a página 132.

cumplimiento a la legislación en la materia, para lo cual, se adjuntó el Dictamen de cumplimiento 22300 emitido el de agosto de dos mil veintiuno por el INAI.

- A juicio de MORENA, al momento de graduar la sanción que, en su caso, se imponga, se debe considerar su conducta tendente a dar cumplimiento a la resolución.
- El INE no tiene elementos para situar la responsabilidad, pues ésta ya se encuentra preconfigurada y determinada por el órgano garante de transparencia y acceso a la información pública y menos tiene elementos para obsequiar una sanción, pues no existe la tipicidad de dichas omisiones en ningún ordenamiento.
- En el caso, a su juicio, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, ya que no es dable determinar la supuesta graduación de responsabilidad y su sanción correspondiente.
- Que su escrito de respuesta al emplazamiento, sea tomado en cuenta al momento de dictar la resolución y, solicita se imponga la **amonestación pública** señalada en la fracción I del artículo 174 de la *Ley Federal de Transparencia*.

3. Contestación a las manifestaciones expuestas por MORENA

Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones expuestas por el partido político denunciado, se debe precisar lo siguiente:

- **MORENA objetó los medios de prueba que aportó el INAI**

Debe señalarse que MORENA objeta los medios de prueba, respecto a su contenido, alcance y valor probatorio, debido a que, con ellos, según su dicho, no se acreditan los hechos denunciados.

Al respecto, debe decirse que la objeción que el denunciado realiza sobre los elementos de prueba que obran en autos, deviene en vaga y genérica, toda vez que no precisa los documentos específicos sobre los cuales formula la objeción, ni las razones que le dan sustento, incumpliendo con ello, lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, que establece lo siguiente:

“Artículo 24.

De la objeción

1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.

2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”

Como puede observarse, la objeción de las pruebas que conforman el sumario que hoy se resuelve por parte de MORENA, no son suficientes para desvirtuar su contenido y alcances probatorios, habida cuenta que se limita a realizar apreciaciones subjetivas, sin hacer referencia alguna a las razones por las cuales, esta autoridad no debe analizarlos o valorarlos positivamente, además de que no aporta los elementos idóneos de prueba con los que demuestre que efectivamente cumplió en tiempo y forma con los mandamientos de la autoridad nacional en materia de transparencia.

Con independencia de ello, debe señalarse que tal y como fue reseñado en el apartado conducente, la conducta e infracción que se le atribuye a MORENA, consiste en el incumplimiento a la determinación de **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, dictada en el expediente **RRA 11165/21**, la cual se encuentra soportada con los elementos de prueba que obran en copia certificada en autos, correspondientes al procedimiento formado con motivo del incumplimiento por parte del partido político denunciado, a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Al respecto, es importante destacar que el medio de prueba que se alude, en esencia, constituye una documental pública, al haber sido emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, cuya firmeza, definitividad y valor y alcance probatorio es plena, respecto a su contenido. De allí que, el argumento vertido por MORENA es desestimado.

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales del criterio de Tesis que se cita a continuación

“COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La existencia de la parte final del artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en la que se expresa que las copias certificadas sólo harán fe cuando estén certificadas por notario, no hace inaplicable lo que disponen los diversos 261 fracción II y 265 ibídem en el sentido de que son documentos públicos los auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en los que se refiere al ejercicio de sus funciones, y de que los instrumentos públicos se tendrán por legítimos y eficaces, salvo que se impugnare expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique, por lo que la copia certificada expedida por quien tiene facultades legales para ello se hace prueba plena en juicio, dado que su valor demostrativo deviene de su autenticidad a virtud de estar autorizada y firmada por funcionario público con facultades para hacerlo.”²⁹

- **La Unidad de Transparencia, de MORENA, agotó sus responsabilidades de conformidad a la *Ley Federal de Transparencia***

Al respecto, debe precisarse que, si bien obra en autos información sobre las acciones que realizó la Unidad de Transparencia de MORENA, al turnar a la Secretaría de Finanzas de dicho instituto político el requerimiento del INAI, al ser, a su decir, el órgano partidario que podría contar con la información, de conformidad al Estatuto de MORENA, lo cierto es que, de la búsqueda que realizó dicha unidad administrativa del mismo ente partidario, no se proporcionó la información requerida por el solicitante, conforme a la instrucción del INAI en el recurso de revisión RRA 11165/21.

En ese sentido, si bien la Unidad de Transparencia de MORENA realizó actos, a su juicio, pertinentes para dar cumplimiento a lo instruido por el INAI, lo cierto es que, con ellas, no se dio cumplimiento a la resolución del expediente del recurso de revisión RRA 11165/21, tal y como en su momento lo determinó la propia autoridad constitucional competente en materia de transparencia, sin que sea procesalmente eficaz, que en este nuevo procedimiento, el cual consiste en el establecimiento de la sanción por las faltas ya acreditadas y con firmeza jurídica, se puedan debatir o poner entredicho frente a lo determinado por la citada autoridad.

²⁹ Época: Octava Época, Registro: 219661, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 466.

- **El INE no tiene elementos para situar la responsabilidad, pues ésta ya se encuentra preconfigurada y determinada por el INAI y menos tiene elementos para obsequiar una sanción, pues no existe la tipicidad de dichas omisiones en ningún ordenamiento.**

A decir del partido político denunciado, el artículo 14, de la *Constitución*, mandata a toda autoridad para que se ciña al dictado normativo para la imposición de una sanción, pues la ley debe prever expresamente la pena que le corresponda en caso de su consumación, para con ello, respetar y hacer respetar la garantía constitucional, que se transgrediría si hubiere una imposición de pena o sanción por analogía y por mayoría de razón

Al respecto, debe señalarse que tal argumento es infundado, por lo siguiente:

Como quedó precisado en el considerando PRIMERO, este Consejo General, es competente para conocer del presente asunto, conforme lo previsto por el artículo 443, párrafo 1, inciso k), de la *LGIPE*, en el que se establece, como infracción sancionable por esta autoridad, el incumplimiento por parte de los partidos políticos, a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 209 de la *Ley General de Transparencia*, y su correlativo de la *Ley Federal de Transparencia* —artículo 187— ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos el organismo garante —en este caso el *INAI*— dará vista al *INE* para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En este sentido, es válido concluir que, si bien el *INAI* determinó que MORENA incumplió una resolución emitida por dicho órgano de transparencia, lo cierto es que, de conformidad con el dispositivo 209 de la *Ley General de Transparencia* en concordancia con el precepto 187 de la *Ley Federal de Transparencia*, lo propio era dar vista a este Instituto, para que resolviera lo conducente, esto es, **imponga la sanción que corresponda.**

Además, sobre el tema, la Sala Superior del *Tribunal Electoral* al dictar sentencia en el recurso de apelación con clave SUP-RAP-14/2019,³⁰ interpuesto por el partido

³⁰ Consulta disponible en el portal del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: https://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0014-2019.pdf

político MORENA, en contra de la determinación **INE/CG36/2019**,³¹ emitida el seis de febrero de dos mil diecinueve por el Consejo General, al resolver el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018, por conductas e infracciones como las que ahora se dirimen, determinó, esencialmente, lo siguiente:

- El párrafo décimo cuarto de la fracción VII, del apartado A, del artículo 6° de la *Constitución*, prevé que la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública **será sancionada en los términos que dispongan las leyes.**
- En términos de lo establecido en el artículo 41, segundo párrafo, fracciones I y V, apartados A y B, de la *Constitución*, **el INE es la autoridad especializada en la materia electoral, encargada de la organización de las elecciones y todo lo vinculado con estas, entre ello, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.**
- El *INE* sustentó su competencia para conocer del asunto, en los artículos 44, párrafo 1, incisos j) y aa), y 443, párrafo 1, incisos a) y k), de la *LGPE*, y 25, párrafo 1, inciso t) de la *LGPP*, que prevén, esencialmente, que el Consejo General tiene facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a las leyes en comento, entre ellas, sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a su información la legislación les impone, así como para conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.
- El *INE* **sí tiene facultades para instaurar el procedimiento administrativo correspondiente para sancionar a los partidos políticos, con motivo de los hechos puestos en conocimiento por parte del INAI, en la que haya determinado que se incumplió con alguna obligación en materia de transparencia.**

Como se aprecia, la Sala Superior del *Tribunal Electoral* consideró que, el *INE* sí tiene competencia para imponer las sanciones por el incumplimiento de los partidos políticos a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

³¹ Consultable en la página electrónica:
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101949/Punto%202.1%20Resoluci%C3%B3n%20INE-CG36-2019%20CG%20EXT%2006-02-2019.pdf>.

Similares consideraciones, se adoptaron por este *Consejo General* en las resoluciones INE/CG100/2019,³² INE/CG101/2019³³ e INE/CG193/2019,³⁴ dictadas dentro de los expedientes UT/SCG/Q/INAI/CG/281/2018, UT/SCG/Q/INAI/CG/283/2018 e UT/SCG/Q/INAI/CG/291/2018, respectivamente, en donde el denunciado hizo valer como causal de improcedencia la falta de competencia de esta autoridad para conocer sobre conducta similar (incumplimiento a resolución del INAI).

Finalmente, respecto a aquellas defensas que guardan relación directa con el fondo del asunto, se analizarán en el apartado correspondiente.

4. Materia del procedimiento.

La materia del presente procedimiento, consiste en determinar el grado de responsabilidad, por el incumplimiento a una resolución del INAI, atribuida a **MORENA**, en términos de lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracciones I, V, VI, VII y VIII, párrafo séptimo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n); de la *LGIPE*; 25, párrafo 1, incisos a), x) e y); 27, 28, párrafos 1 y 6; 30, párrafo 1, incisos f) y t); y 32, de la *LGPP*; 24, fracciones X, XI, XIV; 70, fracciones XXVII y XXXIV; 76, fracciones IV y XXV; 97 y 206, fracciones II y XV, de la *Ley General de Transparencia*; 11, fracciones X, XI y XVI; 74, 154 y 186, fracciones II y XV, de la *Ley Federal de Transparencia*, **por el incumplimiento a la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente RRA 11165/21**, por el Pleno del INAI, en la que se instruyó a **MORENA** diera cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Medios de prueba

Documentales públicas

- a) Oficio INAI/STP/1216/2022,³⁵ firmado por el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI, por el que hace del conocimiento del INE del incumplimiento a la resolución de diecinueve de

³² Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106761/CGex201903-21-rp-2-6.pdf>

³³ Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106762/CGex201903-21-rp-2-7.pdf>

³⁴ Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107566/CGex201904-10-rp-6-23.pdf>

³⁵ Visible a páginas 1-3, por ambos lados.

octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente RRA 11165/21, por parte de MORENA.

- b) Copia certificada del expediente del medio de impugnación RRA 11165/21,³⁶ formado por el *INAI*, con motivo del incumplimiento por parte de MORENA a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.
- c) Oficio INAI/STP/1363/2022,³⁷ firmado por el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del *INAI*, al cual anexó copia certificada del oficio INAI/DGAJ/1025/2022³⁸, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, en el que informa, esencialmente, que: *no existe antecedente alguno de que dichas resoluciones hayan sido impugnadas o recurridas por alguna de las partes a través del juicio de amparo.*
- d) Oficio INAI/STP/0417/2022,³⁹ firmado por la Secretaria Técnica del Pleno del *INAI*, al cual anexó copia certificada del oficio INAI/SAI/DGEEPOED/0712/2022⁴⁰, y anexos, a través del cual la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del INAI, en el cual esencialmente informa, en lo concerniente, que: el Dictamen de cumplimiento con la Clave 22300, corresponde a las acciones que se implementaron para subsanar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que se notificó a MORENA el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
- e) Correo electrónico⁴¹ de la Unidad de Transparencia de MORENA, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido al recurrente, en la cual indica que anexa los archivos de cumplimiento respecto del expediente RRA 11165/21, consistentes en:
- f) Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de Morena, de 10 de noviembre de 2021⁴².

Los medios de prueba descritos, tienen el carácter de **documentales públicas**, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y

³⁶ Visible a páginas 4-64, por ambos lados.

³⁷ Visible a página 78.

³⁸ Visible a páginas 79-80.

³⁹ Visible a página 170 del expediente.

⁴⁰ Visible a páginas 171-174 y anexos 175-190 del expediente.

⁴¹ Visible a página 28 del expediente.

⁴² Visible a página 29 del expediente.

2, de la *LGIFE*; 22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, **cuyo valor probatorio es pleno**, por haber sido expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, y no ser contradictorias entre sí.

Es importante precisar que los dos escritos privados referidos en el inciso c), cuyo original forma parte del expediente relativo a un procedimiento que, en ejercicio de sus funciones, fue substanciado por el *INAI*; quien los exhibió en copia certificada en el presente asunto, revisten el carácter de **documental pública cuyo valor probatorio es pleno, respecto de su existencia**.

Con relación a la anterior valoración, resulta importante y con ánimo de ser ilustrativo reproducir diversos criterios que en Tesis de Jurisprudencia y en Tesis Aisladas, han sido sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre este tipo de documentos que en el presente apartado se han analizado.

“COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS (ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Una debida interpretación del artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice: **“Los documentos privados se presentarán originales y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.”**, permite llegar a la conclusión de que en vista de que el indicado precepto legal no hace alusión a las copias de documentos privados certificadas por notario público, resulta lógico y jurídico que **si una de las partes en un procedimiento exhibe esa clase de documentos, el juzgador debe concederles valor probatorio pleno, siempre y cuando éstos no sean objetados**; lo anterior es así, en razón de que, en términos de lo dispuesto por la Ley del Notariado para el Estado de Coahuila, los notarios son funcionarios que tienen fe pública y, por ello, la certificación que asientan en los referidos documentos debe tenerse por cierta, salvo prueba en contrario.”⁴³

“DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos privados deben ser presentados en original. Dentro de esa acepción deben entenderse comprendidas las copias certificadas por un notario público, dado que éstas, por las atribuciones concedidas a los fedatarios de que se trata, constituyen un fiel reflejo de los originales, siempre que no se demuestre lo contrario.”⁴⁴

⁴³ Época: Novena Época, Registro: 196867, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: VIII.2o.16 K, Página: 486.

⁴⁴ Época: Novena Época, Registro: 193844, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 28/99, Página: 19.

MORENA ofreció como medio de prueba para acreditar, según su dicho, que cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, un disco compacto⁴⁵ que contiene:

- a) Oficio MORENA/OIP/1176/2021, dirigido al solicitante primigenio de la información, a través del cual le informó que, la Unidad de Transparencia, en cumplimiento a la instrucción del Pleno del INAI turnó a la Secretaría de Finanzas, la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21, por ser la unidad administrativa competente para pronunciarse sobre la solicitud de información de conformidad con las atribuciones establecidas en el Estatuto de MORENA; asimismo, le hizo del conocimiento el contenido del acuerdo EXT/CT/10/11/2021.05, por el que se aprobó la clasificación de la información requerida como reservada por tres años.
- b) Oficio MORENA/OIP/1177/2021, dirigido al Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI, por medio del cual le informó sobre la notificación al particular solicitante del contenido del oficio MORENA/OIP/1176/2021 antes señalado.
- c) Correo electrónico de diez de noviembre de dos mil veintiuno, enviado por la Unidad de Transparencia de MORENA, dirigido al solicitante de la información identificada con número de folio 2230000050021, a través del cual, conforme al texto, se remitió carpeta comprimida que contiene los archivos adjuntos del cumplimiento al recurso RRA 11165/21.
- d) Acuse de recibo de envío de información, de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia.
- e) Acuse de oficio de diez de noviembre de dos mil veintiuno en Cumplimiento al recurso de revisión RRA 11165/21, dirigido a la Titular de la Unidad Transparencia de MORENA, por medio del cual la Secretaría de Finanzas de dicho instituto político le informó sobre la reserva de la información solicitada.
- f) Dictamen de cumplimiento a cargo INAI, identificado con la clave 22300, emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno.

⁴⁵ Visible a página 132 del expediente.

- g) Oficio MORENA/OIP/1168/2021, dirigido a la Secretaría de Finanzas de MORENA, por medio del cual la Unidad de Transparencia le hizo del conocimiento de la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21.
- h) *ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE MORENA. 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021*, por el que se aprobó la clasificación de la información requerida como reservada por tres años.
- i) Correo electrónico de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, enviado por la Unidad de Transparencia de MORENA, dirigido a la Secretaría de Finanzas, a través del cual le hizo del conocimiento de la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21.
- j) Expediente del Recurso de Revisión RRA 11165/21.
- k) Instrumental de Actuaciones, consistente en todo lo que obra en el expediente, en lo que beneficie al denunciado.
- l) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que beneficie al sujeto obligado.

5. Acreditación de los hechos.

Sobre el particular, es necesario apuntar, en principio, que conforme con lo establecido por los artículos 93, párrafo segundo, de la *Ley Federal de Transparencia*, y 97, párrafo segundo de la *Ley General de Transparencia*, la resolución materia de denuncia es definitiva e inatacable para el sujeto obligado, en este caso, el partido político denunciado.

Además, debe hacerse notar que las conductas atribuidas a *MORENA* no constituyen hechos controvertidos y, por tanto, se encuentran relevadas de prueba, conforme lo previsto por el dispositivo 461, numeral 1, de la *LGIP*.

Lo anterior, pues de la respuesta que presentó *MORENA*, no se desprende negativa respecto de los hechos atribuidos, sino más bien, argumentos que pretenden justificar las omisiones acreditadas, las cuales serán analizadas en apartado subsecuente.

En concordancia con lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio del estudio probatorio que le confiere el artículo 462 de la *LGIPE*, bajo los principios de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, concluye que han quedado plenamente acreditados los hechos materia de denuncia, consistente en que *MORENA*:

- Incumplió con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, al no atender la resolución dictada el **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, respecto al expediente **RRA 11165/21**, en la que el Pleno del *INAI*, instruyó al referido instituto político que tenía un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación, para cumplir con lo siguiente:

“ ...

- a) Realice una nueva búsqueda en el área administrativa competente a saber, la Secretaría de Finanzas, con un criterio de búsqueda amplio, a efecto de localizar e informar si compró o alquiló el inmueble ubicado en la calle Ejército Nacional número 359, colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; y en su caso, entregar copia en formato electrónico del contrato de compraventa o arrendamiento, donde se especifique la fecha de contratación, el nombre del proveedor, objeto y monto del contrato.

En el supuesto de que el documento contenga información clasificada como confidencial, el sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporcionando el mismo en versión pública, acompañando la resolución del Comité de Transparencia en donde funde y motive la clasificación de los datos confidenciales.

En ese sentido, a efecto de tener certeza sobre el debido acceso a la información, este Instituto, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, verificará la versión pública elaborada por el sujeto obligado previa entrega a la parte recurrente.

- b) Asimismo, en caso de no localizar lo requerido, el Comité de Transparencia deberá emitir acta donde confirme la inexistencia de la información de manera fundada y motivada, de conformidad con el artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública...”

Se afirma lo anterior, toda vez que la conducta ante descrita fue acreditada por el *INAI* en los acuerdos de **veintitrés de noviembre, y veintidós de diciembre, todos de dos mil veintiuno**, emitidos por el *Pleno* de ese Instituto, en los que advirtieron que el partido político *MORENA*, incumplió con lo mandatado en la

resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente **RRA 11165/21**, lo cual constituye un hecho público, notorio y firme.

6. Marco normativo.

En consideración a lo expuesto en el punto 6, de la presente resolución, para determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, se debe recurrir a la legislación que establece **la obligación que tienen los partidos políticos, como sujetos obligados, a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales** que tengan a su alcance con motivo de sus actividades.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. **El derecho a la información será garantizado por el Estado.**

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos

públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

...

VIII. ...

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO

Declaración Universal de los Derechos Humanos

“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, **el de investigar y recibir informaciones y opiniones**, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

“Artículo 19.

...

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de **buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole**, sin consideración de frontera, ya sea **oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento.**”

Convención Americana sobre Derechos Humanos

“Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende **la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole**, sin consideración de fronteras **ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.**”

Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos

“Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de

los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.”

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

...

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

...

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

...

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;

...

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley

Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen.

...

“Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

...

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

...

Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

...

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

...

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo

...

Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.

...

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:

...

XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones.

...

Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.”

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para **garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de** cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

...

Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente Ley.

Artículo 10. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la

presente Ley y podrán ser acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en las mismas.

Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones:

...

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de las facultades legales respectivas;

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia

...

XVI. Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable

...

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113 de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General.

En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto de la Ley General y el capítulo I del Título Tercero de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

...

Artículo 74. ...

Los partidos políticos en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales y las personas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán, en lo conducente, poner a disposición del público y actualizar la información señalada en los artículos 70 y 76 de la Ley General.

Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de

...

II. La declaración de inexistencia de información

...

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto

...

Artículo 151. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos de la presente Ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 152. Cuando en el recurso de revisión se señale como agravio la omisión por parte del sujeto obligado de responder a una solicitud de acceso, y el recurso se resuelva de manera favorable para el recurrente, el sujeto obligado deberá darle acceso a la información en un periodo no mayor a los diez días hábiles; en cuyo caso se hará sin que se requiera del pago correspondiente de derechos por su reproducción, siempre que la resolución esté firme, la entrega sea en el formato requerido originalmente y no se trate de copias certificadas.

...

Artículo 156. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento, dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a su presentación

II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga. De considerarse improcedente el recurso, el Comisionado que conozca del mismo deberá desecharlo mediante acuerdo fundado y motivado, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo otorgado a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, debiendo notificarle dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo;

III. En caso de existir tercero interesado, se le hará la notificación para que en el plazo mencionado en la fracción anterior acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho. Se recibirán aquéllas pruebas que

resulten supervinientes por las partes, mismas que serán tomadas en cuenta, siempre y cuando no se haya dictado la resolución;

V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión. Asimismo, a solicitud de los sujetos obligados o los recurrentes, los recibirá en audiencia, a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión;

VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

VII. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VIII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días.

Artículo 157. Las resoluciones del Instituto podrán:

...

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

...

Artículo 159. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 160. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

...

Artículo 163. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto puedan poner en peligro la seguridad nacional.

La tramitación de este recurso se hará en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, del Título Octavo de la Ley General.

...

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas:

...

XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.

Artículo 187. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Nacional Electoral, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

...

k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información;

...

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.”

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

...

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone

...

Artículo 27.

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

Artículo 28.

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia.

3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.

...

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo, la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia.

...

Artículo 33.

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Estatuto de MORENA⁴⁶

“**Artículo 13° Bis.** MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma en que habrá de cumplirse la ley.”

[Énfasis añadido]

7. Análisis del caso concreto.

De las constancias que obran en autos se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó ante el INAI, recurso de revisión que fue registrado con la clave de expediente RRA 11165/21. Lo anterior, a fin de controvertir la respuesta dada por **MORENA**, a través del oficio MORENA/OIP/933/2021, con motivo de la solicitud de información relativa a la compra o arrendamiento de un inmueble ubicado en la Ciudad de México.

En seguimiento a lo anterior y una vez cumplido con el procedimiento instaurado para tal efecto, el **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, el pleno de dicho órgano garante federal **revocó** la respuesta emitida por el sujeto obligado, al tiempo que instruyó al partido denunciado a efecto de que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, realizara las siguientes acciones:

“ ...

⁴⁶ Consultable en la página electrónica: <https://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/Estatuto-de-MORENA-Publicado-DOF-5-nov-2014.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

- a) Realice una nueva búsqueda en el área administrativa competente a saber, la Secretaría de Finanzas, con un criterio de búsqueda amplio, a efecto de localizar e informar si compró o alquiló el inmueble ubicado en la calle Ejército Nacional número 359, colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; y en su caso, entregar copia en formato electrónico del contrato de compraventa o arrendamiento, donde se especifique la fecha de contratación, el nombre del proveedor, objeto y monto del contrato.

En el supuesto de que el documento contenga información clasificada como confidencial, el sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporcionando el mismo en versión pública, acompañando la resolución del Comité de Transparencia en donde funde y motive la clasificación de los datos confidenciales.

En ese sentido, a efecto de tener certeza sobre el debido acceso a la información, este Instituto, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, verificará la versión pública elaborada por el sujeto obligado previa entrega a la parte recurrente.

- b). Asimismo, en caso de no localizar lo requerido, el Comité de Transparencia deberá emitir acta donde confirme la inexistencia de la información de manera fundada y motivada, de conformidad con el artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública...”

Sin embargo, no obstante el mandamiento del que fue objeto MORENA, y que fue debidamente notificado por medio de la herramienta de comunicación de ese organismo de transparencia, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dicho partido político fue omiso en atender.

Ante tal incumplimiento por el sujeto obligado, el **veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el INAI acordó dar parte al superior jerárquico del sujeto obligado**, para que, en el plazo de cinco días hábiles, se subsanara el incumplimiento decretado, en los términos siguientes:

“**TERCERO.** Con fundamento en los artículos 61 fracciones IV, XI y XII, 62, 134, 169 párrafo primero, y 171 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a través de su Unidad de Transparencia, se requiere al superior jerárquico de todas las áreas poseedoras de los documentos de mérito, les instruya a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la misma: debiendo remitir a este Instituto en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo; las constancias que lo acrediten.

Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, este Instituto podrá determinar la aplicación de una medida de apremio, a quien resulte responsable del incumplimiento,

o bien, dar cauce al procedimiento sancionatorio correspondiente; en términos a lo previsto en los artículos 171 fracción 111, 174, 175 y 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública...”

El acuerdo fue notificado, al superior jerárquico del sujeto obligado, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el INAI determinó que persistía el incumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21.

El acuerdo fue notificado al sujeto obligado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, determinaciones en las que se hizo constar el incumplimiento decretado, los cuales, como se ha mencionado, se encuentran firmes al no interponerse medio de defensa alguno tendientes a controvertirlas. Lo anterior, conforme a lo asentado en el oficio INAI/DGAJ/1025/2022⁴⁷, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, en el que informa, esencialmente, que: *no existe antecedente alguno de que dichas resoluciones hayan sido impugnadas o recurridas por alguna de las partes a través del juicio de amparo.*

Ahora bien, es importante destacar que MORENA, al dar contestación al emplazamiento y a la vista para formular alegatos en el presente procedimiento, manifestó, primordialmente, que había cumplido con el ciento por ciento de cumplimiento a dichas obligaciones, incluyendo la que originó el expediente del recurso de revisión RRA 11165/21, lo que, a su juicio, en principio, pretendía demostrar con el Dictamen de cumplimiento 22300 emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno por el INAI.

En este sentido, en aras de salvaguardar el principio de exhaustividad, la autoridad instructora requirió al INAI para que informara si el Dictamen de cumplimiento 22300 emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno, contemplaba la temporalidad comprendida del requerimiento de información primigenia del cual se derivó el expediente RRA 11165/21.

La respuesta del INAI, proporcionada a través del oficio INAI/STP/0417/2022, recibido el quince de julio de dos mil veintidós, fue, esencialmente, en los términos siguientes:

“ ...

⁴⁷ Visible a páginas 79-80.

Sobre el punto 3 “Indique si dentro de las obligaciones de transparencia verificadas en el dictamen de cumplimiento de diez de agosto de dos mil veintiuno, se encontraba disponible para su consulta el contrato referido anteriormente.”, como se indicó en el punto anterior, **al momento de realizar la verificación no se encontraba reportado el contrato que se indica, por lo tanto, al no estar publicado, no se podía consultar.**

Ahora bien, para mayor abundamiento en relación con los puntos 2 y 3 se informa que las fracciones que tratan sobre contratos son:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (Ley General):

Artículo 70 fracción XXVII, XXXIV, Artículo 76 Fracción IV y XXV

Fracciones en las que se podría haber publicado el contrato indicado, de la descarga que se realizó de la Plataforma Nacional de Transparencia, Portal de Obligaciones de Transparencia con fecha siete de julio de dos mil veintiuno, se obtuvieron los formatos en Excel que contenían la información con la que se realizó la verificación vinculante 2021, **en dichos formatos no se desprende la existencia del contrato que se indica**, se imprimió cada formato en 2 fojas haciendo constar que dichas fojas son obtenidas de los formatos que el sujeto obligado 22300 MORENA tenía publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia cuando se descargó su información para realizar la verificación vinculante 2021 el día siete de julio de dos mil veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno.” (sic)

(Énfasis añadido)

Al respecto, debe señalarse que, el Dictamen de cumplimiento 22300, en el cual MORENA quiso soportar su eximente de responsabilidad, con la respuesta del INAI, se comprobó que es un documento que no guarda relación con el incumplimiento que se le atribuye al partido político denunciado, ya que, como el propio denunciado manifiesta en su escrito de contestación a la vista de alegatos, **resulta evidente que el Dictamen previamente citado, no resulta materia de este procedimiento sancionador ordinario, toda vez que los hechos materia del presente procedimiento sancionador acontecieron posteriormente a la emisión de este.**

Expuesto lo anterior, debe señalarse que el acceso a la información es un derecho fundamental en México, reconocido en el artículo 6, de la *Constitución*, el cual comprende el derecho a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información pública en posesión de los sujetos obligados, incluyendo los partidos políticos, cuyo ejercicio efectivo favorece a la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, principios fundamentales de las democracias contemporáneas.

Adicionalmente, el *Tribunal Electoral* ha precisado que los partidos políticos, como entidades de interés público, son copartícipes en la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información, de forma oportuna y veraz, y por ello los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna.

Es importante destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la *Ley General de Transparencia*, dicho ordenamiento legal es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria del artículo 6o. de la *Constitución*, en materia de transparencia y acceso a la información, teniendo por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los partidos políticos, entre otros sujetos.

En ese sentido, en el artículo 76 de la *Ley General de Transparencia*, se establecen las obligaciones de transparencia comunes que deben cumplir, entre otros sujetos obligados, los partidos políticos. Entre esas obligaciones, se encuentra la que el partido político MORENA incumplió, conforme a lo establecido por el *INAI*, en la resolución de **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, esto es, la omisión de publicar la información a que se hace referencia en los artículos 70, fracciones XXVII y XXXIV; 76, fracciones IV y XXV, de la *Ley General de Transparencia*.

“**Artículo 70.** En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

...

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

...

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

...

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

...

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores”

Esto es, no obstante el conocimiento del partido MORENA de su obligación primigenia de publicar la información antes referida, conforme a lo previsto en los artículos antes transcritos, dicho instituto político fue omiso en dar cumplimiento, motivo por el cual se formuló solicitud de información y, posteriormente, se interpuso ante el *INAI* recurso de revisión en contra de la respuesta dada por dicho instituto político, en el que se determinó revocar la respuesta e instruyó al partido procediera a brindar la información, lo que, como se evidenció, no aconteció, razón por la que se obtuvo que existió un incumplimiento a la resolución del *INAI*.

Por lo tanto, a consideración de esta autoridad, el partido político denunciado, incumplió con los artículos 6, Apartado A, fracciones I, V, VI, VII y VIII, párrafo séptimo, de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n); de la *LGIPE*; 25, párrafo 1, incisos a), x) e y); 27, 28, párrafos 1 y 6; 30, párrafo 1, incisos f) y t); y 32, de la *LGPP*; 24, fracciones X, XI, XIV; 70, fracciones XXVII y XXXIV; 76, fracciones IV y XXV; 97 y 206, fracciones II y XV, de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 11, fracciones X, XI y XVI; 74, 93 y 186, fracciones II y XV, de la *Ley Federal de Transparencia*.

Con base en los razonamientos anteriores se **acredita la infracción atribuida a MORENA**, al haber quedado plenamente acreditado en autos que el partido político denunciado incumplió la resolución emitida por el *INAI* **el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que resultó fundado el presente procedimiento, se procede a determinar la sanción correspondiente a MORENA, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 456 y 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativos a las sanciones que se le pueden imponer a un partido político, así como a los elementos a considerar para la individualización de la sanción, tales como la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución

de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

| Tipo de infracción | Denominación de la infracción | Descripción de la Conducta | Disposiciones Jurídicas infringidas |
|--|--|---|---|
| La vulneración de preceptos de la <i>Constitución</i> , <i>LGIPE</i> , <i>LGPP</i> , la <i>Ley Federal de Transparencia</i> y la <i>Ley General de Transparencia</i> | Incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. | EL incumplimiento a la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno , dictada en el expediente RRA 11165/21 , al haber omitido publicar la información correspondiente a, contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; relativa a las fracciones XXVII, XXXIV, del artículo 70, y IV y XXV del artículo 76, de la <i>Ley General de Transparencia</i> . | Artículos 6, Apartado A, fracciones I, V, VI, VII y VIII, párrafo séptimo, de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n); de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), x) e y); 27, 28, párrafos 1 y 6; 30, párrafo 1, incisos f) y t); y 32, de la LGPP; 24, fracciones X, XI, XIV; 70, fracciones XXVII y XXXIV; 76, fracciones IV y XXV; 97 y 206, fracciones II y XV, de la <i>Ley General de Transparencia</i> y Acceso a la Información Pública; 11, fracciones X, XI y XVI; 74, 93 y 186, fracciones II y XV, de la <i>Ley Federal de Transparencia</i> . |

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida)

El bien jurídico tutelado, es aquel valor social material o inmaterial efectivamente protegido por el derecho, contenido en las normas jurídicas vigentes en el Estado y la comunidad internacional, mismo que se vulnera cuando los *sujetos obligados* no publiquen o actualicen la información en materia de transparencia y acceso a la información pública que obren en su poder y no cumplan con las determinaciones del órgano garante en materia de transparencia.

En el caso en particular, las disposiciones legales que se determinaron transgredidas, protegen el bien jurídico consistente en el **derecho humano a la información**, por una parte, y al debido cumplimiento a las resoluciones emitidas por el *INAI*.

Respecto a la naturaleza del partido político como sujeto obligado, se debe ponderar que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como garante de los bienes jurídicos protegidos antes señalados, de ahí que su obligatoriedad en el cumplimiento de las leyes en la materia y la tutela del valor jurídico sea insoslayable.

C. Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada

Las conductas sancionables por la norma, pueden realizarse en una o varias acciones, de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales.

Así, a partir de las consideraciones sostenidas por el *INAI* y que han sido sostenidas en la determinación que ahora se emite, se puede concluir que la conducta atribuible a MORENA, se realizó al incumplir con lo mandatado en la resolución de **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, en el **medio de impugnación RRA 11165/21**.

Como se advierte, existe **singularidad** de la conducta infractora.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe valorarse en atención a las circunstancias en que se llevó a cabo, como son:

| MODO | TIEMPO | LUGAR |
|--|---|---|
| La infracción consistió en la omisión de MORENA a dar cumplimiento a lo ordenado por el <i>INAI</i> en la resolución dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en | <p>La conducta de MORENA se realizó al no dar cumplimiento a lo ordenado en la determinación dictada por el pleno del <i>INAI</i>, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en el expediente RRA 11165/21.</p> <p>Dicha determinación fue notificada al partido político MORENA el 22 de octubre de 2021, concediéndole el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación, para su cumplimiento, sin que MORENA lo hubiera realizado.</p> <p>El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el INAI emitió acuerdo de incumplimiento, requiriendo al sujeto obligado para que un plazo no mayor a cinco días hábiles a dar cabal cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 11165/21.</p> | La conducta se realizó en la Ciudad de México, que es el lugar en el que MORENA tiene sus oficinas centrales. |

| MODO | TIEMPO | LUGAR |
|-----------------------------|--|-------|
| el expediente RRA 11165/21. | <p>El acuerdo fue notificado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, sin que MORENA lo hubiera realizado.</p> <p>El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el INAI emitió acuerdo en el que dictaminó que persiste el incumplimiento a la resolución emitida por el Pleno de ese Instituto, del recurso de revisión RRA 11165/21.</p> | |

E. Comisión dolosa o culposa de la falta

La infracción acreditada por la autoridad nacional de transparencia, en el caso, es **dolosa**, conforme con los siguientes razonamientos.

En principio, debe establecerse que, en el caso, en el expediente en que se actúa existen elementos o indicios que permitan establecer que la omisión acreditada respecto del partido político MORENA, obedeció a una intención deliberada o a una acción concertada de la que se desprende el deseo de incumplir con la determinación del *INAI*, emitida el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en el expediente de recurso de revisión RRA 11165/21.

Para dar claridad a la anterior conclusión, debe tenerse presente que de conformidad con la Tesis **XLV/2002**,⁴⁸ emitida por el *Tribunal Electoral* de rubro *DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL*, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables *mutatis mutandis*, al derecho administrativo sancionador, toda vez que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal, son manifestaciones del *ius puniendi* estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies.

En esta lógica, es importante destacar, como marco referencial, que de acuerdo con el artículo 9 del Código Penal Federal **obra dolosamente** el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, **quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley**; asimismo, se establece que **obra culposamente** el que produce el resultado típico, **que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría**, en virtud de la

⁴⁸ Consulta disponible en el portal del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002>

transgresión a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

En ese sentido, para determinar que el sujeto activo actuó de forma dolosa en la comisión de una conducta no basta con asumir que el infractor tenía conocimiento de que su actuar, positivo (acción) o negativo (omisión), podía tener consecuencias jurídicas, esto es, que su conducta era ilícita y, por lo tanto, sería susceptible de ser sancionada, sino que se requiere demostrar con elementos objetivos que el infractor tenía el deseo de provocar las consecuencias lesivas de la conducta.

En otras palabras, para calificar una conducta dolosa se requiere que el juzgador demuestre la existencia del elemento volitivo respecto al resultado, bajo determinados indicadores objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una decisión contra el bien jurídico;⁴⁹ en caso contrario, se estará ante una conducta culposa, pues si bien en este caso, el infractor es consciente de que su conducta produce o puede producir efectos lesivos, no los acepta ni los desea directamente, y generalmente se producen por su negligencia, su imprudencia, su falta de atención, de pericia, de precauciones o de cuidados necesarios.⁵⁰

Ahora, si bien los partidos políticos como entidades de interés público están obligados a ajustar su actuación conforme a la *Constitución* y las leyes que le resulten aplicables, y en el caso en particular, a conocer y cumplir con las obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que le impone la normativa en esta materia, ello no es suficiente para concluir que determinada conducta es dolosa, sino que se requiere además de elementos objetivos que nos permitan arribar a la conclusión de que el partido infractor actuó deliberadamente o que fue el resultado de una acción concertada de la que se advierta el deseo de provocar molestia o daño.

En el presente caso, esta autoridad considera que el incumplimiento a la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente recurso de revisión RRA 11165/21, por parte de MORENA, conducta que originó que el *INAI* lo hiciera del conocimiento del *INE*, no puede considerarse como una falta de cuidado, negligencia o imprudencia de dicho sujeto obligado, pues en el expediente obran elementos de prueba que permiten advertir que el mencionado

⁴⁹ I.9o.P.37 P (10a.), DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON REPRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTIVO COMETA UN HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO CON POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo, p. 1765.

⁵⁰ CULPA EN EL DELITO. NATURALEZA, Séptima Época, *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen 97-102, Sexta Parte, pág. 71.

instituto político, incluso, pretendió clasificar como reservada la información, con el objeto de no brindar la información requerida.

Esto es, el partido político MORENA, en lugar de proporcionar la información solicitada, cuya entrega le fue ordenada por el *INAI*, determinó clasificarla como reservada, sin que, está fuera considerada como tal por el *INAI*, al establecer que dicho órgano de transparencia que *los hechos manifestados por el sujeto obligado, para llevar a cabo la clasificación de la información no tienen relación con el cumplimiento ordenado por [ese] Instituto, en referencia a que si MORENA compró o alquiló el inmueble de mérito.*⁵¹

Es por lo que, en el caso, existen elementos objetivos que permiten concluir que dicha omisión fue intencional o con la finalidad de desacatar con lo mandatado por el *INAI*, y con ello incumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, lo que se tradujo en una infracción a la normativa en esta materia, por la cual se está sancionado, de allí que se estime que la conducta es de carácter **doloso**.

Se arriba a las anteriores afirmaciones, toda vez que, si bien en los autos del expediente administrativo sustanciado ante el *INAI*, puede apreciarse que el partido político MORENA, mediante oficios MORENA/OIP/1176/2021 y MORENA/OIP/1177/2021, informó sobre las acciones que había desplegado para dar, a su juicio, cumplimiento a la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, lo cierto es que las acciones descritas fue hacer del conocimiento la reserva de la información que emitió dicho instituto político, sin que, como lo señaló el *INAI*, existiera una relación o justificación para la reserva, razón por la que se considera que el incumplimiento señalado tuvo como finalidad o resultado no proporcionar la información solicitada y, a su vez, ordenada por el *INAI*, incumpliendo con ello normas en materia de transparencia y una determinación del órgano de transparencia nacional.

Es por lo que, ante los elementos que evidencian una intención del partido político denunciado, de incumplir con lo ordenado por el *INAI*, en el expediente RRA 11165/21, es que la conducta se cataloga como **dolosa**.

⁵¹ Visible a página 1 del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente RRA 11165/21.

F. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución

La conducta desplegada por la parte denunciada se cometió a través del correo electrónico señalado por el solicitante de la información, a través del cual MORENA le notificó la determinación de clasificación de reserva de la información, incumpliendo, con ello, con lo mandatado en la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente recurso de revisión RRA 11165/21.

2. Individualización de la sanción.

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia.

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido MORENA, este organismo electoral autónomo considera que **sí se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la *LGIE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, el *Tribunal Electoral* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.⁵²

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, en el presente asunto, **sí** puede considerarse actualizado dicho supuesto, pues en los archivos del *INE*, obra la resolución **INE/CG192/2019**,⁵³ en la que se sancionó a MORENA por faltas como la que se sanciona por esta vía, la cual fue dictada el **diez de abril de dos mil diecinueve, y confirmada por Sala Superior mediante sentencia de tres de mayo de dos mil diecinueve**, al resolver el **SUP-RAP-58/2019**,⁵⁴ esto es, con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

En efecto, existe resolución respecto al incumplimiento de MORENA a una determinación dictada por el *INAI*, relacionada con la omisión del partido de cumplimentar sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, la cual fue dictada con antelación a los hechos materia de Litis, esto es, antes de la determinación de **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente recurso de revisión RRA 11165/21**.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el caso, se considera de **gravedad ordinaria** en atención a lo siguiente:

- La infracción es de tipo constitucional y legal.

⁵² Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

⁵³ Consultable en la página de internet: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107564/CGex201904-10-rp-6-21.pdf>

⁵⁴ Consulta en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0058-2019.pdf

- Se tuvo por acreditada la conducta infractora tal y como se advierte los acuerdos de incumplimiento dictados el **veintitrés de noviembre y veintidós de diciembre de dos mil veintiuno** dentro del expediente identificado con la clave **RRA 11165/21**.
- Se trata de una sola infracción.
- **Sí** se acreditó reincidencia.
- Se estableció previamente que la infracción fue de carácter **doloso**.

C. Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la *LGIPE* confiere a esta autoridad, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a MORENA, por tratarse de un partido político nacional, se encuentran especificadas en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*.

Al respecto, cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

El citado artículo dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas transgresoras de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada, se determina que el partido político MORENA debe ser objeto de sanción que tenga

en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I de la *LGIPE*, consistente en amonestación pública sería insuficiente, mientras que las indicadas en las fracciones III, IV y V del precepto señalado serían desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos mencionados, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa**, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa.

En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer **multa** como sanción a MORENA, debido a que inobservó sus obligaciones en materia de acceso a la información.

Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁵⁵ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

⁵⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, el parámetro de sanciones monetarias que se pueden imponer a los partidos políticos, será desde uno hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero de la *Constitución* –efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el criterio sostenido por el *Tribunal Electoral* en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**,⁵⁶ de rubro *MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN*, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, *al imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción*, en consecuencia, esta autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente, la conducta que se imputa a *MORENA*, corresponde al **dos mil veintiuno**, y, que el

⁵⁶ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

valor de valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa anualidad fue de **\$89.62** (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.).⁵⁷

A partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer, de manera razonada y proporcionalmente con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares de las conductas, el monto o cuantía que considere serán idóneas para reprender e inhibir nuevamente la realización de las mismas conductas por el mismo sujeto infractor o por otros.

Bajo esa óptica, **en principio**, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer una multa de **1,000** (un mil) **Unidades de Medida y Actualización**, equivalentes a **\$89,620.00** (ochenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), vigentes en dos mil veintiuno.

Similares consideraciones en cuanto al monto de la sanción, se adoptaron por este *Consejo General* en los acuerdos INE/CG1212/2018,⁵⁸ INE/CG36/2019,⁵⁹ INE/CG100/2019⁶⁰ e INE/CG101/2019,⁶¹ dictados dentro de los expedientes UT/SCG/Q/INAI/CG/46/2018, UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018, UT/SCG/Q/INAI/CG/281/2018 y UT/SCG/Q/INAI/CG/283/2018, respectivamente.

Así como en las siguientes resoluciones, mismas que fueron confirmadas por la Sala Superior del *Tribunal Electoral*:

| EXPEDIENTE | RESOLUCIÓN | RECURSO DE APELACIÓN |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| UT/SCG/Q/INAI/CG/284/2018 | INE/CG192/2019 | SUP-RAP-58/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/312/2018 | INE/CG194/2019 | SUP-RAP-57/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/2/2019 | INE/CG195/2019 | SUP-RAP-59/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/285/2018 | INE/CG196/2019 | SUP-RAP-54/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/313/2018 | INE/CG197/2019 | SUP-RAP-56/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/1/2019 | INE/CG198/2019 | SUP-RAP-60/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/28/2019 | INE/CG199/2019 | SUP-RAP-53/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/303/2018 | INE/CG200/2019 | SUP-RAP-55/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/302/2018 | INE/CG276/2019 | SUP-RAP-102/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/26/2019 | INE/CG277/2019 | SUP-RAP-103/2019 |
| UT/SCG/Q/INAI/CG/50/2019 | INE/CG278/2019 | SUP-RAP-104/2019 |

⁵⁷ Consultable en la página de internet: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

⁵⁸ Consultable en la página electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98244/CGor201808-23-rp-16-5.pdf>

⁵⁹ Como se indicó, dicha determinación fue confirmada mediante sentencia dictada el seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, al resolver el recurso de apelación registrado con la clave SUP-RAP-14/2019.

⁶⁰ Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106761/CGex201903-21-rp-2-6.pdf>

⁶¹ Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106762/CGex201903-21-rp-2-7.pdf>

No obstante, toda vez que, como se indicó, en el caso, **existe reincidencia por parte del partido político MORENA**, es que, en el caso concreto, se considera oportuno incrementar el monto de la multa a **1,500 (un mil quinientas) Unidades de Medida y Actualización, vigentes en dos mil veintiuno**, equivalentes a **\$134,430.00 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.)**.

En concepto de esta autoridad, la multa es proporcional y razonable, ya que, conforme con los razonamientos expuestos, se está en presencia de una falta que se cometió derivado de una omisión, situación que obligadamente fue tomada en cuenta por esta autoridad para imponer la multa de mérito, lo cual tiene como finalidad que los partidos políticos, como entidades de interés público, en términos de lo establecido en la Base Primera del artículo 41, de la *Constitución*, cumplan y velen por que se cumpla, al interior de su vida interna, las disposiciones contenidas en todo el marco normativo vigente, dentro del cual se encuentran, indudablemente, aquellas relativas a los derechos humanos de los gobernados tanto al acceso a la información como a la protección de sus datos personales; de ahí que la presente sanción, se reitera, se estima idónea, eficaz y proporcional con la falta acreditada en el presente procedimiento.

No pasa inadvertido que MORENA, en su escrito de respuesta al emplazamiento, manifestó que, en su caso, se imponga la **amonestación pública** señalada en la fracción I del artículo 174 de la *Ley Federal de Transparencia*; sin embargo, debe señalarse lo siguiente:

1. El catálogo de sanciones a imponer a los sujetos obligados de la *LGIPE*, *LGPP*, así como demás normativa aplicable, por parte del INE, está previsto en el artículo 456 de la citada *LGIPE*.
2. Conforme al catálogo antes referido, entre las sanciones a imponer a los partidos políticos se encuentra la amonestación pública.

En ese sentido, tomando en consideración que existe un catálogo específico, para la imposición de sanciones en los procedimientos administrativos sancionadores que resuelve esta autoridad electoral y que, en ese catálogo, está prevista la amonestación pública como una posible sanción, resulta incuestionable señalar que no existe razón o justificación alguna para aplicar una normativa distinta.

En ese tenor, si bien la amonestación pública pudiera ser sanción aplicable, lo cierto es que en el caso concreto, atendiendo las particularidades de este, por las razones

expuestas en el presente considerando, no resulta aplicable dicha sanción y sí la multa referida con antelación.

En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, se estima que la sanción que se impone al partido político es suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, ya sea por parte del propio partido ahora denunciado u otro sujeto y, asimismo, se considera que la cuantía aplicable en el presente caso constituye una base idónea, razonable y proporcional a la conducta en que incurrió dicho partido, si se considera la afectación de los bienes jurídicos tutelados.

D. Beneficio o lucro

No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen por el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso acontece.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/**02997/2022**, emitido por la *DEPPP*, se advierte que a **MORENA** le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **octubre** de dos mil veintidós, la cantidad de **\$139,155,282.13** (ciento treinta y nueve millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 13/100 M.N.).

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa el **0.09 %** de su ministración mensual (calculado al segundo decimal).

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba MORENA, una vez que esta resolución haya quedado firme.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida a **MORENA**, con motivo del incumplimiento a una determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de la presente resolución.

SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando **CUARTO**, se impone a **MORENA** una multa de **1,500 (un mil quinientas) Unidades de Medida y Actualización, vigentes en dos mil veintiuno**, equivalentes a **\$134,430.00 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.)**.

TERCERO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a **MORENA**, será deducida de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, en términos de lo argumentado en el último párrafo del Considerando **CUARTO**.

CUARTO. En términos del Considerando **QUINTO**, la presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

NOTIFÍQUESE al partido político **MORENA**, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/45/2022

Por oficio, a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por **estrados**, a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**